

**Corte Suprema acoge amparo deducido en contra de decisión del Ministerio de Justicia que rechazó el beneficio reducción de condena del amparado, y disponiendo que se dicte a la brevedad el decreto que disponga la ejecución del beneficio. VEC del Ministro Sr. Valderrama (CS Rol N°7.428-2022, 16.03.2022).**

**Norma asociada:** CPR ART. 21; L19.856; L21.421

**Tema:** Recursos; Garantías Constitucionales; Principios y Garantías del Sistema Procesal Penal; Derecho Penitenciario; Reducción de condena

**Descriptor:** Reducción de condena; Acciones constitucionales; Derecho a la libertad personal y a la seguridad individual; Beneficios carcelarios

**SÍNTESIS:** Corte Suprema revoca sentencia apelada dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, y acoge amparo deducido por la defensa, dejando sin efecto decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que rechazó el beneficio de rebaja de condena de 5 meses, disponiendo que, se dicte a la brevedad el decreto que disponga la ejecución del beneficio. La Corte señala que, no corresponde aplicar ley nueva a condenado que había sido beneficiado con reducción de condena en virtud de una ley anterior. Que, la decisión de reducir el tiempo de condena está radicada en la Comisión Especial de Reducción de Condenas, por tanto, el argumento del Ministerio de Justicia, de que se trata en este caso, al igual que la libertad condicional, se trata de normas penitenciarias (6) que se rigen bajo los principios del Derecho Administrativo. Voto en contra del Ministro Sr. Valderrama quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos. **(Considerandos 4, 5 y 6).**

**TEXTO COMPLETO:**

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

A los escritos folios 18250-2022, 18567-2022 y 18888-2022: a todo, téngase presente.

**VISTOS:**

Se reproduce la sentencia apelada con excepción de sus motivos sexto y séptimo, que se eliminan.

Y se tiene, además, presente:

**Primero:** Que, *la pena es la sanción legal establecida como consecuencia de la perpetración de un delito, que consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos del delincente, impuesta por sentencia judicial ejecutoriada, luego de un debido proceso, y cuya ejecución queda entregada desde el punto de vista de su forma, a la ley.*” (Ortiz-Arévalo, “Las consecuencias jurídicas del delito”, Edit. Jdca., 2013, p.17.)

**Segundo:** Que, de acuerdo a conocidas reglas constitucionales y legales, la pena con que un delito ha de ser castigado debe estar establecida en una ley con anterioridad a la perpetración del hecho, sin perjuicio de las alteraciones favorables o beneficiosas para el responsable, fruto de leyes posteriores.

**Tercero:** Que, en la especie, el amparado fue condenado a una pena privativa de libertad de tres años y un día, en que ha mantenido una conducta sobresaliente, siendo postulado

a la reducción de condena bajo parámetros que estaban vigentes en dicha oportunidad y que fueron los mismos que consideró la Comisión respectiva para decidir privativa y administrativamente rebajarla en cinco meses, quedando así el cumplimiento para el día 12 de febrero de 2022, sin que ese organismo dejara constancia de objeciones al otorgamiento del beneficio.

**Cuarto:** Que, lo que se pretende ahora por la recurrida es aplicar a su proceso, que ya estaba así definido, una normativa nueva, que no sólo es posterior a tal resolución, sino que además torna más gravosa la situación del amparado desde que priva de todo efecto a lo resuelto por el órgano técnico llamado a resolver en específico, manteniéndolo en cambio privado de su libertad.

**Quinto:** Que, así las cosas, la Comisión Especial de Reducción de Condenas ya emitió un pronunciamiento zanjando la discusión en torno al debido cumplimiento de condena del solicitante, por lo que tal decisión ya estaba vigente con unas mismas reglas, faltando sólo la formalización de la misma para su aplicación, criterio que debe primar teniendo en cuenta que lo que está en juego es un derecho fundamental, como lo es la libertad personal, consagrada no sólo en la Constitución Política de la República y la legislación nacional, sino también en conocidos instrumentos internacionales, vigentes en Chile.

**Sexto:** Que, no es admisible el argumento del Ministerio de Justicia, de que se trata en este caso –al igual que en la Libertad Condicional- de “normas penitenciarias que se rigen bajo los principios del Derecho Administrativo.”

En efecto, estamos en presencia de una modificación de la Ley 19.856 obrada por la dictación de la Ley 21.421 que incide directamente en la forma de cumplimiento de una pena, que por la vía administrativa no puede operar en perjuicio del beneficiario.

Por estas consideraciones, **se revoca** la sentencia apelada de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, en el Ingreso Corte Rol N° Amparo-60-2022, y en su lugar se resuelve que **se acoge** la acción de amparo incoada en favor de X.X.X.X., dejándose sin efecto el decreto exento 338/2022 de 10 de febrero de 2022 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que rechazó la reducción de condena de la Ley 19.856.- a su respecto.

**Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Valderrama**, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase. Comuníquese por la vía más expedita.

**Rol N° 7.428-2022.**

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



**Defensoría**  
Sin defensa no hay Justicia